



Agencia
Nacional de Minería



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES DE LA
SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO RAD.
25000234100020130245901 DE 4 DE AGOSTO DE 2022**



- I. **Sentencia del Consejo de Estado radicado 25000234100020130245901 de 4 de agosto de 2022, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo**
- II. **Auto de 29 de septiembre de 2022 proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo**
- III. **Dependencias internas suscritas al cumplimiento del fallo**
- IV. **Gestiones administrativas preparatorias para desplegar las acciones de cumplimiento del fallo**
 - i. **Resolución 545 de 25 de octubre de 2022** *“Por medio del cual se acoge y acata el fallo judicial proferido por el Consejo de Estado, el 4 de agosto de 2022, adicionado y aclarado, el 29 de septiembre de 2022, dentro de la Acción Popular No. 250002341000-2013 02459-01, y se dictan unas disposiciones de índole tecnológico”*
 - ii. **Circular No. SG – 40002023E4000013 del 19 de enero de 2023**, resultado de la articulación interinstitucional de las autoridades ambientales y minera.
 - iii. **Decreto No. 107 del 26 de enero de 2023** *“por el cual se adoptan medidas por parte del Gobierno nacional para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 4 de agosto de 2022, adicionado y aclarada mediante Auto del 29 de septiembre de 2022, dentro de la Acción Popular número 250002341000-2013-02459-01, y se dictan otras disposiciones.”*
 - iv. **Ajustes tecnológicos plataforma Anna Minería necesarios para permitir la presentación del certificado ambiental.**
 - v. **Espacios pedagógicos**
- V. **Actuaciones administrativas de cumplimiento del fallo**
 - i. **Requerimientos masivos de presentación del requisito de certificación ambiental**
 - ii. **Autos de suspensión por falta de certeza ambiental**
 - iii. **Coordinación interinstitucional con autoridades ambientales de orden nacional y autónomas regionales**
 - iv. **Retos**
- VI. **Resultados consolidados de las acciones de cumplimiento del fallo**

I. Sentencia del Consejo de Estado radicado 25000234100020130245901 de 4 de agosto de 2022, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo.

El 04 de agosto de 2022, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decidió los recursos de apelación interpuestos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, por la Agencia Nacional de Minería, por el Ministerio de Minas y Energía y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en contra de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el curso del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos de radicado 25000234100020130245901.

En esta decisión, la Honorable Sala de lo Contencioso Administrativo resolvió proteger los derechos e intereses colectivos y los ecosistemas estratégicos de nuestro país, para lo que consideró oportuno dictar diferentes órdenes que permitieran promover la sostenibilidad ambiental del sector minero, acorde a los usos autorizados en los territorios y la minería.

En cuanto a las ordenes impartidas al sector minero, hay que resaltar algunas **consideraciones** que sirvieron de sustento de la decisión para propiciar la máxima comprensión y alcance de las acciones que debió desplegar la Agencia Nacional de Minería, como autoridad minera nacional, para cumplir con tan importantes disposiciones.

“II.5.5.1. Acciones de ordenamiento minero-ambiental para las nuevas solicitudes de titulación.

1345. Respecto de las primeras órdenes de salvaguarda de los derechos colectivos, tal y como se mencionó en el apartado II.5.2.1. de este proveído, la Sala advierte que es necesario proteger los ecosistemas del SINAP que no cuentan con un Plan de Manejo y aquellos en los que la zonificación no permite o condicionó el desarrollo de las actividades mineras, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad entre los usos autorizados en esos territorios y la minería.

1346. Del mismo modo se tendrán que salvaguardar las áreas de conservación in situ de origen legal a que alude el subtítulo c) del capítulo II.3.3. de este proveído⁶³⁶, y los ecosistemas a que se refiere la ruta de acción para el cumplimiento del CONPES 4050, según lo señalado en el subtítulo e) del capítulo II.5.1 de esta providencia.

1347. Para ello, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 16, 34, 36, 53, 270, 201, 271, 273 y 274 del Código de Minas, respetando lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016, a través de las siguientes acciones:

1348. En primer lugar, como es necesario preservar a través del mecanismo de protección previsto en el artículo 47 del CNRRN⁶³⁷ y en el Decreto 1374 de 2013⁶³⁸ los territorios del SINAP y las zonas de conservación in situ de origen legal que actualmente no están catalogadas como zonas de exclusión o restricción, y que deberían estarlo de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído⁶³⁹, se ordenará que:

i) En el término de dos (2) años, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su calidad de rector del SINA, junto con las autoridades mineras y ambientales competentes, deberá elaborar un documento que relacione e identifique: i) los ecosistemas del SINAP zonificados en los que esté prohibida o

restringida la minería, ii) los ecosistemas del SINAP en los que esté permitida la minería, y iii) los ecosistemas del SINAP que no cuenten con zonificación y, por ende, con Plan de Manejo que defina los sectores en donde se autoriza este tipo de actividades.

li) En el término de dos (2) años, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, el ente ministerial antes mencionado, junto con las autoridades mineras y ambientales competentes, deberá elaborar un documento que relacione e identifique las áreas de conservación in situ de origen legal que no pertenecen al SINAP, tales como: i) las reservas forestales de la Ley 2ª de 1959, ii) las cuencas hidrográficas catalogadas como áreas de manejo especial en el CNRR, iii) las reservas forestales productoras y protectoras productoras, iv) las reservas de recursos naturales consignadas en el artículo 47 del CNRR, v) los humedales RAMSAR, los humedales no RAMSAR, vi) los páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuífero, vi) los arrecifes de coral, los pastos marinos, los manglares y iv) las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá.

iii) Con fundamento en cada uno de esos documentos, en el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de los mismos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto con las autoridades que estime competentes, elaborará y adoptará mediante acto administrativo las cartografías de las áreas de protección identificadas en los estudios señalados en los dos numerales anteriores, haciendo uso de la figura prevista en el artículo 47 del CNRR y en el Decreto 1374 de 2013, a efectos de prohibir allí el desarrollo de todo tipo de actividad minera, hasta que exista certeza sobre la compatibilidad de esa labor con la zonificación de cada territorio protegido.

iv) Posteriormente, en el término de tres (3) meses contados a partir del momento en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expida los actos administrativos a que se refiere el numeral anterior, la Agencia Nacional de Minería⁶⁴⁰ y el Ministerio de Minas y Energía adoptarán los correctivos necesarios para salvaguardar estos territorios provisionalmente, esto es actualizar la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las zonas de “minería restringida” que reporta Anna Minería, y modificar los procedimientos e instructivos que tienen que ver con el uso de esas figuras.

v) Una vez finalicen los procesos de zonificación de aquellas áreas en las que existía duda sobre la compatibilidad, la Agencia Nacional de Minería actualizará la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las zonas de “minería restringida” que reporta Anna Minería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Código de Minas.

1349. En segundo lugar, resulta prioritario definir una estrategia permanente y continua de conservación de los nuevos territorios de protección y categorías de manejo que las autoridades ambientales creen, delimiten y zonifiquen en el futuro, teniendo en cuenta los compromisos adoptados en la política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con una visión 2021 – 2030 (CONPES 4050 de 2021). Para lo cual se ordenará que:

i) Cada (6) meses el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su calidad de rector del SINA, presentará al Comité de Verificación del fallo un informe de avance del cumplimiento de las siguientes líneas estratégicas: (...)

ii) Durante el desarrollo de esta política, y cada vez que las autoridades ambientales identifiquen nuevos territorios que deben pertenecer al SINAP, el MAD, junto con las autoridades mineras y ambientales que estime competentes, estarán en la obligación de ejecutar las acciones suficientes y pertinentes para conservar esos ecosistemas de manera transitoria a través de la figura prevista en el artículo 47 del CNRR y en el Decreto 1374 de 2013, hasta que culminen las labores de declaratoria, delimitación y zonificación.

vi) Una vez finalicen los procesos de delimitación y zonificación de los nuevos ecosistemas del SINAP, la Agencia Nacional de Minería actualizará la información relacionada con las “zonas excluibles de la minería” y las zonas de “minería restringida” que reporta Anna Minería, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del Código de Minas.

1350. En tercer lugar, y mientras culminan las acciones de conservación enunciadas en el párrafo 1347, en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, la Agencia Nacional de Minería deberá adoptar las siguientes «medidas especiales para asegurar la protección al ambiente y el adecuado manejo de los recursos naturales en la entrega de contratos de concesión», según lo dispuesto en los artículos 16, 53, 570 y 271 de la Ley 685 de 2001, a saber:

i) Tendrá que exigir a los proponentes que aporten con su solicitud de titulación un certificado de las autoridades ambientales competentes en el que informen si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3 de esta sentencia, si tal territorio se encuentra zonificado, y si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. En el evento en que existan dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia se deberá abstener a resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza sobre la compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución.

ii) En ese mismo término, la ANM actualizará la información que reporta la plataforma Anna Minería respecto de los territorios protegidos en los que actualmente existe certeza sobre la exclusión y restricción, según las consideraciones expuestas en los subtítulos A y B del capítulo II.5.2.1. de esta sentencia.

II.5.5.2. Desarrollos tecnológicos de Anna Minería para la comunicación, coordinación, evaluación y seguimiento minero-ambiental

1351. En cuanto al segundo grupo de órdenes de protección de los derechos colectivos, tal y como se indicó en el subtítulo a) del acápite II.5.2.3 de esta sentencia, la Sala dispondrá que el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, con la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el término de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de este proveído, efectúen la revisión y ajuste de la plataforma Anna Minería con el propósito de implementar un módulo tecnológico que permita, en tiempo real, tramitar y fiscalizar el componente ambiental de los títulos mineros, garantizando la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información.

1352. Tal revisión y ajuste deberá buscar: i) la usabilidad, accesibilidad, funcionabilidad e interoperabilidad de los datos y plataformas tecnológicas implementadas en ambos sectores, entre ellas VITAL, y ii) desarrollar los módulos o procesos que permitan mejorar el trámite, comunicación, coordinación, evaluación, seguimiento y auditoría minero- ambiental.

1353. Con tal propósito, la Sala exhortará al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Agencia Nacional Digital, para que coadyuve en el cumplimiento de la decisión, en virtud de sus funciones legales y reglamentarias, en los términos dispuestos en el último inciso del artículo 34 de la ley 472. (...)”

Esbozadas las anteriores consideraciones, el Honorable Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, resolvió:

“PRIMERO: CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto declaró como no probada la excepción denominada improcedencia de la acción.

SEGUNDO: CONFIRMAR el ordinal segundo de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto concedió el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, a la conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de áreas de especial importancia ecológica, y a la defensa del patrimonio público, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia de 6 de diciembre de 2018, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

TERCERO: Para el restablecimiento de los mencionados derechos colectivos, se impartirán las siguientes directrices:

1. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería, que apliquen los artículos 16, 34, 36, 53, 270, 201, 271, 273 y 274 del Código de Minas, respetando lo resuelto por la Corte Constitucional en las sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C-389 de 2016, para lo cual adoptarán las siguientes acciones:

1.1. En lo atinente a la preservación de las áreas pertenecientes al SINAP y a las zonas de conservación in situ de origen legal que actualmente no están catalogadas como zonas de exclusión o restricción, y que deberían estarlo de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído: (...)

1.2. En lo atinente al cumplimiento de los compromisos adoptados en la política pública para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con una visión 2021– 2030 (CONPES 4050 de 2021): (...)

1.3. Medidas temporales mientras se cumple la orden 1.1.

1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, deberá exigir a los proponentes que aporten con su solicitud de titulación un certificado de las autoridades ambientales competentes en el que se informe: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de esta sentencia; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. En el evento en que se presenten dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de Minería deberá abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución.

1.3.2. La Agencia Nacional de Minería, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, actualizará la información que reporta la plataforma Anna Minería respecto de los territorios protegidos en los que actualmente existe certeza sobre la exclusión y restricción del desarrollo de actividades mineras, según las consideraciones expuestas en los subtítulos A, B y C del capítulo II.5.2.1. de esta sentencia (ver párrafos 961 al 966, 969, 972, 990 al 994, 1008 y 1013 al 1015). (...)"

II. Auto de 29 de septiembre de 2022 proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo

Frente a la sentencia del 4 de agosto de 2022 proferida por el Consejo de Estado, se presentaron solicitudes de aclaración y de adición por parte de la Procuraduría General de la Nación y el

Ministerio de Minas y Energía, razón por la cual la Honorable Sala emitió el Auto del 29 de septiembre de 2022 con el fin de conservar la seguridad de las decisiones judiciales.

Disposición que merece ser citada en algunas de sus **consideraciones** y el **texto definitivo de las órdenes** con el fin de comprender el alcance de estas y las entidades llamadas al cumplimiento del fallo judicial:

“III.5.1. De las órdenes temporales mientras culminan los procesos de declaratoria, delimitación y zonificación de los ecosistemas protegidos

142. En la sentencia de 4 de agosto de 2022 la Sala adopto dos medidas temporales.

143. En primer lugar, le ordenó a la Agencia Nacional de Minería que actualice, en el periodo de dos (2) meses, las capas geográficas que reporta la plataforma Anna Minería con el propósito de incluir los ecosistemas que gozan de protección legal y que fueron declarados y zonificados por la autoridad ambiental competente restringiendo o prohibiendo el desarrollo de actividades mineras, pero que actualmente no aparecen reportados en la base de datos, en virtud de los lineamientos de funcionamiento del sistema.

*144. En relación con esta orden, cabe resaltar que **la información reportada en los sistemas estatales utilizados por la Agencia Nacional de Minería para acatar este primer mandato judicial no está completa**, debido al lento desarrollo de los respectivos procedimientos de declaratoria, delimitación y zonificación de los territorios ambientalmente protegidos del país.*

*145. En consecuencia, para estructurar temporalmente un método de entrega de títulos mineros que acoja el principio de desarrollo sostenible, la Sala ordenó, en segundo lugar, a la Agencia Nacional de Minería que **exigiera a los proponentes la presentación, junto con los documentos de la propuesta, de un certificado en donde las autoridades ambientales competentes informen:** (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas enunciados en los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia de 4 de agosto; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. (...)*

*147. La Sala adoptó estas medidas temporales a efectos de proteger los derechos colectivos ambientales, y para mitigar los riesgos generados por el proceso tardío de conservación de los ecosistemas estratégicos, **mientras las entidades competentes adelantan las órdenes que permitirán actualizar integralmente la información que reporta Anna Minería sobre los ecosistemas estratégicos del territorio nacional.***

148. En suma, la Sala de Decisión determinó que temporalmente la Agencia Nacional de Minería se abstendría de resolver de fondo la propuesta de concesión minera, cuando la autoridad ambiental certifique que el proyecto se ubica en un ecosistema estratégico cuya declaratoria, delimitación o zonificación se encuentra en trámite; pues en tal evento debe tenerse en cuenta la problemática vigente de planeación y ordenamiento ambiental del país y que la Corte Constitucional, en el artículo sexto de la sentencia C-339 de 2002, declaró exequibles los incisos 3° y 4° del artículo 34 de la Ley 685 de 2001, «en el entendido que la autoridad ambiental deberá aplicar el principio de precaución», así:

*«[...] en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; **la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.** [...]» (negritas de la Sala)*

149. Sin embargo, la Sala observa que, al momento de expedir estos certificados, las autoridades ambientales en un tiempo reducido podrían afrontar problemas de diversa índole, lo que, a su vez, dilataría la toma de decisiones. A modo de ejemplo, factores técnicos tales como la escala de los mapeos cartográficos o el cambio en las condiciones naturales del territorio, entre otros, dificultarían su labor.

150. En consecuencia, **resulta necesario adicionar la instrucción judicial para que la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, junto con las entidades que estimen pertinentes, definan, de forma provisional y mientras se cumple la orden dispuesta en el numeral 1.1. del ordinal tercero de la sentencia de 4 de agosto de 2022, y en el término de tres (3) meses: (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para adoptar esas decisiones, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios.**

151. Esta adición permite el desarrollo sostenible del sector minero, pues propende por aumentar la seguridad jurídica de los futuros proponentes, durante la etapa transitoria en la que las entidades competentes están fortaleciendo y complementando la información que reportará Anna Minería.

(...)

159. Finalmente, es pertinente recordar a las entidades de los sectores minero y ambiental -que concurrirán en el restablecimiento de los derechos colectivos aquí amparados- que **la minería es una actividad necesaria para el desarrollo económico del país y, por eso, el cumplimiento de la sentencia busca el desarrollo sostenible y equilibrado del aludido sector.**” (negritas fuera de texto original)

Con sustento en las anteriores razones, el Consejo de Estado **resolvió:**

CUARTO: ADICIONAR, por las razones expuestas en este proveído, los numerales 1.3.1. y 1.4. del ordinal tercero de la sentencia de 4 de agosto de 2022, los cuales quedaran así:

«[...] 1.3.1. La Agencia Nacional de Minería, deberá exigir a los proponentes que aporten, junto con la solicitud de titulación, un certificado proferido por la autoridad ambiental competente, en el que se informe: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de esta sentencia; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. En el evento en que se presenten dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, la Agencia Nacional de Minería deberá abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza sobre la referida compatibilidad, dando aplicación al principio de precaución.

Para tal efecto, en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, y junto con las entidades de los sectores minero y ambiental que estimen competentes, establecerán previamente: (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios. (...)” (negritas fuera de texto original)

III. Dependencias internas suscritas al cumplimiento del fallo

Vicepresidencia de Contratación y Titulación

El Decreto Ley 4134 de 2001, creó la Agencia Nacional de Minería y determinó en su estructura organizacional la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, quien a su vez cuenta para el ejercicio de sus funciones misionales, con cinco (5) grupos de trabajo, de los cuales, dos dependencias se encuentran vinculadas al cumplimiento del fallo judicial en virtud de las funciones asignadas y delegadas:

- Grupo de Contratación Minera

El artículo 7 de la Resolución 206 del 22 de marzo de 2013, modificado por el artículo 3 de la Resolución 223 del 29 de abril de 2021, modificado por el artículo 3 de la Resolución 130 del 8 de marzo de 2022 y el artículo 3 de la Resolución 681 del 29 de noviembre de 2022, establece que las funciones del grupo se orientan a la gestión jurídica, técnica, económica y ambiental de las propuestas de concesión, propuestas diferenciales y autorizaciones temporales.

En tal virtud, esta dependencia es la encargada de impulsar y gestionar, bajo la coordinación estratégica de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, las acciones tendientes al cumplimiento de la **orden 1.3.1 del ordinal tercero** de la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2022, adicionada y aclarada mediante Auto del 29 de septiembre de 2022.

IV. Gestiones administrativas preparatorias para desplegar las acciones de cumplimiento del fallo

Toda vez que la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 4 de agosto de 2022, adicionada y aclarada mediante Auto del 29 de septiembre de 2022, ordenó a la Agencia Nacional de Minería exigir a los proponentes que aporten, junto con la solicitud de titulación, un certificado proferido por la autoridad ambiental competente, en el que se informe: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de esta sentencia; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación. Y que, para tal efecto, concedió el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para que la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, y junto con las entidades de los sectores minero y ambiental que estimaran competentes, establecieran previamente: (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios, a continuación se exponen las gestiones administrativas preparatorias para desplegar las acciones de cumplimiento del referido fallo:

- Resolución 545 de 25 de octubre de 2022** *“Por medio del cual se acoge y acata el fallo judicial proferido por el Consejo de Estado, el 4 de agosto de 2022, adicionado y aclarado, el 29 de septiembre de 2022, dentro de la Acción Popular No. 250002341000-2013 02459-01, y se dictan unas disposiciones de índole tecnológico”*

Teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Gestión Minera – Plataforma Anna Minería, no contaba con el desarrollo tecnológico requerido para realizar la recepción y validación del certificado ambiental el cual deberán aportar los proponentes junto a los documentos de la propuesta, se consideró necesario realizar ajustes tecnológicos a la Plataforma Anna Minería, para que los solicitantes de propuestas de contrato de concesión minera y contrato de concesión con requisitos diferenciales contaran con las herramientas para cumplir con la presentación del mencionado requisito. Así las cosas, la Agencia Nacional de Minería, encontró necesario realizar el ajuste tecnológico de las funcionalidades “radicar Propuesta de Contrato de Concesión” y “solicitud de Contrato de Concesión Diferencial”.

Para proceder de conformidad, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución 545 de 25 de octubre de 2022 por la cual ordenó *“REALIZAR los ajustes tecnológicos de las funcionalidades: “radicar solicitud de propuesta de contrato de concesión” y “radicar solicitud de contrato de concesión diferencial” en el Sistema Integral de Gestión Minera – AnnA Minería, o del sistema que lo modifique o sustituya, de conformidad y en los términos previstos por el H. Consejo de Estado, en sentencia de fecha 4 de agosto de 2022, aclarada y adicionada mediante providencia de fecha 29 de septiembre de 2022.”*

De igual forma dispuso que los formularios de propuesta de concesión (PIN) que no pudieran utilizarse durante el ajuste tecnológico de las funcionalidades de la plataforma Anna Minería, serían habilitados por el término de vigencia restante, lo que se tradujo en que durante el periodo de ajuste tecnológico, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los efectos del fallo judicial y el debido proceso de los proponentes, no se podrían presentar nuevas propuestas de contrato de concesión minera en Colombia.

Con esta gestión administrativa, la Agencia Nacional de Minería a través de las dependencias internas competentes, ejecutó la primera acción preparatoria para hacer posible el cumplimiento de la sentencia.

ii. Circular No. SG – 40002023E4000013 del 19 de enero de 2023, resultado de la articulación interinstitucional de las autoridades ambientales y minera:

En virtud de lo ordenado por la Sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2022, adicionada y aclarada el 29 de septiembre de 2022, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías, en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, y junto con las entidades de los sectores minero y ambiental que estimaran competentes, contaban con el término de tres (3) meses, a partir de la ejecutoria de la sentencia, para establecer (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios.

Así que, en ejercicio de la función administrativa y las reglas de organización y funcionamiento de la administración pública establecidas en la Ley 489 de 1998 (Art. 6), la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el de Minas y Energías desarrollaron acciones

de articulación y coordinación entre ambos sectores administrativos para concretar el cumplimiento de esta orden.

Como resultado de la mencionada articulación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, se establecieron las orientaciones, definiciones y mecanismos a partir de los cuales, las autoridades ambientales deberán expedir el certificado ambiental señalado en el numeral 1.3.1 del ordinal tercero del fallo, y se precisaron los elementos que permitieran establecer la compatibilidad de la actividad minera con los factores ambientales presentes en el territorio.

Así las cosas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de las competencias establecidas en la Ley 99 de 1993 y el Decreto Ley 3570 de 2011, como la de “Diseñar y formular la política, planes, programas y proyectos, y establecer los criterios, directrices, orientaciones y lineamientos en materia de áreas protegidas; así como formular la política en materia del Sistema de Parques Nacionales Naturales.”, emitió **Circular No. SG – 40002023E4000013 del 19 de enero de 2023** con el fin de garantizar la articulación sectorial y coordinación entre entidades públicas, además de garantizar las áreas protegidas y áreas de conservación in situ como determinante ambiental.

La mencionada circular estableció: (i) el procedimiento y los mecanismos de coordinación intersectorial que se utilizarán para la expedición de los certificados, (ii) los plazos máximos para la expedición de los certificados, y (iii) las garantías al debido proceso de los peticionarios, de la siguiente manera:

- Señaló los requisitos mínimos para solicitar la certificación ambiental
- Trámite y término de respuesta que deben garantizar las autoridades ambientales para resolver la solicitud de certificación ambiental
- Contenidos mínimos de la certificación ambiental, según lo establecido por el Consejo de Estado en el numeral 1.3.1 del fallo referido.

Aunque la autoridad administrativa competente para establecer este procedimiento es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería a través de las dependencias internas vinculadas al proceso, participó activamente de la gestión de coordinación y cumplió con un segundo aspecto ordenado en la sentencia y al que la vinculó el honorable Consejo de Estado.

- iii. Decreto No. 107 del 26 de enero de 2023** “por el cual se adoptan medidas por parte del Gobierno nacional para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, el 4 de agosto de 2022, adicionado y aclarada mediante Auto del 29 de septiembre de 2022, dentro de la Acción Popular número 250002341000-2013-02459-01, y se dictan otras disposiciones.”

El Gobierno nacional es el encargado de i) adoptar las medidas necesarias para preservar los territorios del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y las zonas de conservación in situ de

origen legal que actualmente no están catalogadas como zonas de exclusión o restricción; ii) definir una estrategia permanente y continua de conservación de los nuevos territorios de protección y categorías de manejo que las autoridades ambientales creen, delimiten y zonifiquen en el futuro; iii) adoptar medidas especiales para asegurar el adecuado manejo de los recursos naturales para el otorgamiento de contratos de concesión, según lo dispuesto en los artículos 16, 53, 570 y 271 de la Ley 685 de 2001; y iv) establecer mecanismos de articulación institucional en materia de política pública minero ambiental.

De conformidad con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado en la sentencia objeto de cumplimiento, es claro que se debe adecuar el trámite de evaluación de las propuestas de titulación minera respetando todos los territorios ambientales en los que la minería está prohibida y restringida, según lo dispuesto los artículos 16, 34, 36, 53, 270, 201, 271, 273 y 274 del Código de Minas, y atendiendo lo resuelto por la Corte Constitucional en las Sentencias C-339 de 2002, C-443 de 2009 y C 389 de 2016. Cambios que implican que la política minera contemple con mayor relevancia las determinantes ambientales del territorio nacional.

Por lo anterior, y como resultado de la participación efectiva, oportuna y permanente de las diferentes autoridades ambientales, y mineras, la Presidencia de la República, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía expedieron el Decreto 107 del pasado 26 de enero de 2023 por el cual decretaron adoptar las medidas administrativas necesarias para que las entidades responsables en el cumplimiento del fallo judicial proferido por el Consejo de Estado dentro de la Acción Popular número 250002341000-2013-02459-01, ajusten sus políticas, procedimientos y normativa atendiendo lo resuelto en la referida providencia.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Código de Minas, las propuestas de contrato de concesión minera, por sí solas no confieren derecho alguno frente al Estado y constituyen meras expectativas por cuanto son situaciones jurídicas no consolidadas, tal, y como lo manifestó la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-983 de 2010, se advierte que las propuestas en trámite deberán ajustarse a cualquier cambio normativo y jurisprudencial en virtud del cual se establezcan nuevos requisitos o condiciones para su evaluación, sin que ello vulnere derecho alguno de los proponentes.

En desarrollo de lo anterior, en el numeral dos del artículo segundo, el Gobierno Nacional ordenó *“A la Agencia Nacional de Minería que exija el certificado previsto en este artículo a los proponentes de las áreas que a la fecha de expedición de este Decreto aún no cuentan con título minero. (...)”*

Desde la expedición del citado decreto, la Agencia Nacional de Minería contaba con la claridad necesaria para exigir el requisito de certificación ambiental en todos los trámites mineros en curso y garantizar el cumplimiento de la sentencia.

iv. Ajustes tecnológicos plataforma Anna Minería necesarios para permitir la presentación del certificado ambiental

El 24 de enero de 2023, y dando cumplimiento al término de tres (3) meses ordenados en el numeral 1.3.1, adicionado por el artículo cuarto del 29 de septiembre de 2022, del fallo de Consejo de Estado, la ANM anunció la reapertura del Sistema Integrado de Gestión – Anna Minería con las funcionalidades y ajustes necesarios para recibir nuevas propuestas de contrato de concesión y propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales y que pudieran cumplir con la presentación del certificado ambiental.

La Agencia Nacional de Minería para garantizar que los interesados en tramites mineros contaran con las funcionalidades tecnológicas necesarias para presentar el requisito dispuesto por el Consejo de Estado y, con ocasión de la expedición del Decreto 107 del 26 de enero de 2023, comunicó, a través de su página que se realizarían ajustes de procedimientos, operativos y tecnológicos en la plataforma Anna Minería por 90 días calendario aproximadamente. (Ver en línea: Comunicado ANM https://www.anm.gov.co/?q=iniciativas_operativas_y_tecnologicas_de_la_anm)



Que, el día 19 de abril de 2023, la Agencia Nacional de Minería adelantó un espacio de pedagogía para la ciudadanía en general, donde profesionales de la ANM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al cual participaron 797 personas, buscó dar a conocer:


- i. Contexto jurídico que da origen al requisito de certificación ambiental
- ii. Requisitos mínimos para la solicitud a la autoridad ambiental a través de la plataforma Vital del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible.
- iii. Como descargar las Celdas en AnnA Minería
- iv. Como radicar la solicitud ante la plataforma Vital del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cabeza de profesionales de esa cartera ministerial

El espacio pedagógico acá mencionado lo publicó la Agencia Nacional de Minería en YouTube para consultar fácilmente a los interesados mineros. Podrá consultarse la misma en el siguiente link <https://www.youtube.com/watch?v=GpZvI7gjKHI>



Que, el 19 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Minería culminó los ajustes tecnológicos en su plataforma Anna Minería para permitir a los proponentes, que no contaran con título minero a la fecha de la expedición del Decreto 107 de 2023, radicar el certificado ambiental expedido por la autoridad ambiental competente a través de la plataforma vital o constancia de inicio de trámite.

Realizadas las pruebas necesarias, el 29 de mayo de 2023, la Agencia Nacional de Minería informó a los proponentes de las propuestas de contrato de concesión y propuestas de contrato con requisitos diferenciales vigentes y en trámite, que el Grupo de Contratación Minera de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación los requeriría para que aportaran, a través de Anna Minería, la certificación ambiental o la constancia de radicación de la solicitud ante la(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s) en la Plataforma VITAL. (Ver en línea: Comunicado ANM <https://www.anm.gov.co/?q=culminarondesarrollostecnologicos>)

La ANM informa que culminaron los desarrollos tecnológicos necesarios en el sistema Anna Minería para la presentación de las certificaciones ambientales. 



• La ANM informa a toda la ciudadanía que ya cuenta con el desarrollo tecnológico en la plataforma Anna Minería para radicar la certificación ambiental o la constancia de radicación de la solicitud del certificado ante la autoridad ambiental en las propuestas de contrato de concesión en trámite.

29 de mayo de 2023. La Agencia Nacional de Minería se permite informar al público interesado que en cumplimiento del fallo del Consejo de Estado y en ejecución a lo previsto en el artículo 2º del Decreto 107 de 2023, ya cuenta con el desarrollo tecnológico en la plataforma Anna Minería y los procedimientos operativos para la presentación de la certificación ambiental en propuestas de contrato de concesión en trámite.

Según lo expuesto, los proponentes de propuestas de contrato de concesión en trámite y los nuevos interesados mineros contarán con los ajustes tecnológicos en plataforma para aportar la certificación ambiental.

Aunado a lo anterior, la Agencia Nacional de Minería durante más de seis meses desplegó diferentes **actividades de pedagogía y comunicación para que los interesados mineros conocieran la existencia de este requisito y como la ANM iba dar cumplimiento a este,** razón por la cual, previo

a la realización de autos de requerimiento masivo a través de los cuales materializara las ordenes de la sentencia y del Decreto 107 del 26 de enero de 2023.

El 05 de junio de 2023 se comunicó al público en general que la autoridad minera a partir del 13 de junio de 2023 daría inicio a la expedición de autos de requerimientos, para que estos interesados pudieran allegar certificación o constancia de solicitud de expedición de la certificación ante la autoridad ambiental competente o autoridades ambientales competentes, por conducto de la Plataforma Vital, en los términos de la Circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 19 de enero de 2023 y en cumplimiento y ejecución de lo previsto en el artículo 2º del Decreto 107 del 26 de enero de 2023. (Comunicado que se encuentra dispuesta en la página web de la entidad a través del siguiente link <https://www.anm.gov.co/?q=certificacionambiental>)

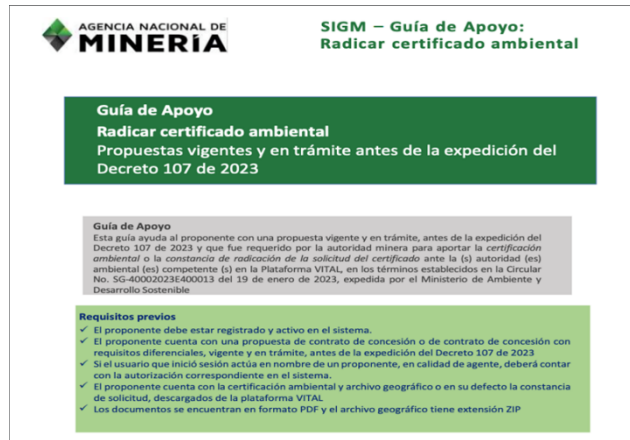
	<p>La ANM anuncia requerimiento para presentar la Certificación Ambiental en las propuestas de contrato de concesión en trámite.</p> <p>La Agencia Nacional de Minería (ANM), anuncia que el 13 de junio del año en curso realizará requerimiento masivo para que los solicitantes en las propuestas de contrato de concesión en trámite aporten la certificación ambiental o la constancia de radicación de la solicitud de la misma.</p> <p>Ver más</p>
---	---

v. Espacios pedagógicos

Ahora bien, la Agencia Nacional de Minería en procura del debido proceso y en pro de nuestros interesados mineros, ha adelantado diferentes videos e instructivos con el fin de que los proponentes tengan las herramientas suficientes para poder dar respuesta a los requerimientos en la plataforma AnnA Minería, como consecuencia del nuevo requisito del Consejo de Estado, además de la ya conocida por los proponentes, correspondiente al correo electrónico mesadeayudaanna@anm.gov.co

Para lo cual, hacemos un listado de las herramientas dispuestas para nuestros proponentes:

- I) Video de Descarga de celdas en Anna Minería (Link <https://www.anm.gov.co/?q=ventanilla-minera>)
- II) Preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas del espacio de pedagogía
- III) Instructivo para cargar la certificación ambiental a la plataforma Anna Minería. (Link https://www.anm.gov.co/sites/default/files/Guia_Radicar_Certificado_Ambiental_antes_Decreto_107.pdf)



- IV) Instructivo sobre cómo cargar la certificación ambiental a la plataforma Anna Minería (Pieza videográfica para mayor ilustración). (Link https://www.youtube.com/watch?v=tebiEh4_PAS)



- v) Instructivo para cargar certificación ambiental y demás documentación por la suspensión de trámites ambientales ordenados por falta de certeza. ABC "Radicar Certificado Ambiental en estado Para Rectificar y Suspendida-Documentación Pendiente" a través del siguiente enlace: <https://lc.cx/-rMELB> (La publicación de la nota publicitaria se puede consultar en:

<https://x.com/ANMColombia/status/1838338728617529391>

<https://www.facebook.com/share/p/cp62ZuBdMJuvJvrY/>

- V) **Actuaciones administrativas de cumplimiento de la orden 1.3.1 del ordinal tercero de la sentencia**

Es claro que el Consejo de Estado le ordenó a la Agencia Nacional de Minería que **exigiera a los proponentes la presentación, junto con los documentos de la propuesta, de un certificado en**

donde las autoridades ambientales competentes informen: (i) si su proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas enunciados en los subtítulos b) y c) del capítulo II.3.3. de la sentencia de 4 de agosto; (ii) si tal territorio se encuentra zonificado, y (iii) si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación.

También le ordenó a la entidad que cuando se presenten dudas sobre la compatibilidad del proyecto para conservar, se abstenga de resolver de fondo la propuesta hasta que exista certeza sobre la compatibilidad, aplicando el principio de precaución, toda vez que “«[...] en caso de presentarse una falta de certeza científica absoluta frente a la exploración o explotación minera de una zona determinada; **la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección de medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.** [...]»” (negrillas de la Sala)

Ambas órdenes dictadas a efectos de proteger los derechos colectivos ambientales, y para mitigar los riesgos generados por el proceso tardío de conservación de los ecosistemas estratégicos, mientras las autoridades ambientales suministren la información que le permita actualizar integralmente la información que reporta Anna Minería sobre los ecosistemas estratégicos del territorio nacional.

Por lo anterior, a continuación, se presenta el reporte de cumplimiento de las órdenes citadas:

i. Requerimientos masivos de presentación del requisito de certificación ambiental

Considerando lo anterior y los avances tecnológicos implementados en la plataforma Anna Minería, la Agencia Nacional de Minería ha emitido Autos masivos para los años 2023 y 2024, requiriendo a los proponentes presentar el Certificado Ambiental según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la circular mencionada. Es importante destacar que el único medio autorizado para la entrega de esta documentación es la plataforma Anna Minería. Por lo tanto, cualquier intento de aportar la Certificación Ambiental por otros medios se considerará como no presentada.

Adicional a lo anterior, para la radicación de solicitudes de propuesta de contrato de concesión (PCC) y Propuesta de Contrato de Concesión Diferencial (PCCD) nuevas, ósea aquellas radicadas a partir del 24 de enero de 2023, el Consejo de Estado, El Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Minería han dejado claro que las propuestas nuevas solo se podrán radicar junto con la documentación soporte la certificación ambiental expedida con anterioridad a esta o en su defecto el mismo día de radicación.

En cumplimiento a lo ordenado en lo previsto en el numeral 2 del artículo 2 del **Decreto No. 107 del 26 de enero de 2023**, el Gobierno Nacional adoptó medidas para el cumplimiento de la referida sentencia, para lo cual decretó que la Agencia Nacional de Minería debía exigir el certificado a los proponentes de las áreas que a la fecha de expedición del Decreto aún no contaran con título minero. Razón por la cual, esta autoridad minera expidió 11 autos de requerimiento masivo durante el año 2023. Así mismo, durante lo corrido del presente año la Agencia Nacional de Minería ha expedido veinte (34) autos de requerimiento masivo con el objetivo de solicitar a los proponentes allegar certificación ambiental o solicitud con constancia, donde se han requerido un total **4941**

propuestas de contrato de concesión o propuestas de contrato de concesión con requisitos diferencias en lo corrido de la vigencia 2023 y 2024.

Como consecuencia de los requerimientos masivos efectuados en lo corrido del año y una vez cumplidos los términos de los mencionados requerimientos, esta autoridad minera, verificó la información encontrando entonces que:

- I) Que el **40% (93)** de las propuestas requeridas, aportaron la **Certificación Ambiental** expedida por la autoridad ambiental competente del área de su interés
- II) El **16% (38)** de las propuestas requeridas, aportaron **constancia** de radicación de la solicitud ante vital
- III) El **33 % (78)** de las propuestas requeridas, **no dieron respuesta** al auto de requerimiento o en su defecto, manifestaron su intención de **desistir** del trámite de la propuesta,
- IV) Y el **11 % (26)** propuestas se encuentran cumpliendo los términos para dar respuesta al auto de requerimiento

Lo anterior es preciso indicar que, a la fecha de este informe, tres (3) de los autos de requerimiento efectuados estaban en términos para responder al requerimiento de Certificación Ambiental.

ii. Evaluación del requisito de certificación ambiental

La Autoridad Minera, revisa el contenido de la certificación ambiental emitida por la autoridad ambiental correspondiente al área de interés, proporcionada por los proponentes, por lo tanto, los profesionales verifican:

- Que la(las) certificación(es) ambiental(es) sea(n) expedidas por la(s) autoridad(es) ambiental(es) competente(s) a través de la plataforma de Ventanilla Minera – VITAL¹.
 - Que la(s) certificación(es) Ambiental(es) emitida(s) por la(s) Corporación(es) Ambiental(es) por medio de la ventanilla minera - VITAL y radicada por el proponente en la Plataforma Anna Minería sean los mismos y contengan el mismo número vital.
 - Que el área certificada por la(s) autoridad(es) ambiental(es) corresponda con la solicitada a la Anna Minería.
 - La información de la certificación ambiental que expida la autoridad ambiental competente.
 - Número VITAL.
 - Si el proyecto minero de interés se superpone o no con alguno de los ecosistemas a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo 1.3.3. de la sentencia.
- B. Ecosistemas del SINAP
- B1. Del sistema de parques Nacionales Naturales
 - B2. De las Reservas Forestales Protectoras
 - B3. De los Parques Naturales Regionales
 - B4. De los Distritos de Manejo Integrado
 - B5. De los Distritos de Conservación de Suelo

¹ <http://vital.minambiente.gov.co/SILPA/TestSilpa/Security/Default.aspx>

- B6. De las áreas de Recreación
 - B7. De las Reservas Naturales de la sociedad civil
 - C. De las áreas de conservación in situ de origen
 - C.1 La Reserva Forestal de la Ley 2da de 1959
 - C2. Los humedales RAMSAR y humedales NO RAMSAR
 - C3. De los páramos
 - C4. De los arrecifes de coral, los pastos marinos y los manglares
 - C5. De las reservas temporales excluibles de la minería
 - C6. Las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá.
 - Si tal territorio correspondiente al área que se pretende concesionar se encuentra zonificado de acuerdo con la zonificación ambiental vigente.
 - Si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación.
 - El mapa, salida gráfica con el resultado del análisis de información ambiental sobre el polígono de interés, el cual deberá ser entregado en el mismo sistema de referencia indicado en el numeral i de la presente circular.
- Se verifica que las determinantes ambientales del polígono solicitado en las que pueda llegar a restringir o excluir la actividad en el área de la propuesta en la plataforma de Anna Minería.

iii. Autos de suspensión por falta de certeza ambiental

Como resultado de las evaluaciones a los certificados ambientales presentados por los proponentes en el trámite de las propuestas de contrato, se identificaron eventos o situaciones en los que irremediablemente, a pesar de la información suministrada en la certificación por parte de la autoridad ambiental competente, perduraron dudas sobre la compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación, y por lo tanto, la Agencia Nacional de Minería en aplicación al principio de precaución, debió abstenerse de resolver de fondo la propuesta hasta tanto obtuviera información que brindara certeza sobre la referida compatibilidad.

Las situaciones se derivan, en todos los casos del contenido de la certificación ambiental y, son las siguientes:

- (i) En el certificado ambiental, la autoridad ambiental competente no señaló de manera clara y expresa si el proyecto minero de interés se superpone o no con ecosistemas del SINAP o con áreas de conservación in situ de origen legal.
- (ii) En el certificado ambiental, la autoridad ambiental competente no señaló de manera clara y expresa si tal territorio correspondiente al área que se pretende concesionar se encuentra zonificado de acuerdo con la zonificación ambiental vigente.
- (iii) En el certificado ambiental, la autoridad ambiental competente no señaló de manera clara y expresa si las actividades mineras están permitidas en el instrumento de zonificación.

(iv) En el certificado ambiental, la autoridad ambiental competente señaló que el proyecto minero de interés se superpone con ecosistemas diferentes a que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II. 3.3. de la sentencia, por ejemplo: determinantes ambientales como POMCAS.

(v) En el certificado ambiental, la autoridad ambiental competente señaló que el proyecto minero de interés se superpone con ecosistemas del SINAP, con áreas de conservación in situ de origen legal o con determinantes ambientales diferentes a las que se refieren los subtítulos b) y c) del capítulo II. 3.3. de la sentencia y que no se encuentran con información actualizada en la plataforma Anna Minería.

En concordancia con la sentencia de 4 de agosto de 2022, adicionada y aclarada a través del Auto de fecha 29 de septiembre de 2022, la Agencia Nacional de Minería ha ordenado la suspensión de **70** trámites de las propuestas cuya certificación ambiental no proporciona certeza sobre la compatibilidad del proyecto minero con el área de conservación.

iv. Coordinación interinstitucional con autoridades ambientales de orden nacional y autónomas regionales

La Agencia Nacional de Minería, en cumplimiento del fallo mencionado, ha trabajado en una coordinación y articulación constante con diversas autoridades ambientales. Para ello, ha suscrito 19 convenios interadministrativos con algunas de estas autoridades, incluyendo la CORPOGUAVIO, CORPOCESAR, CORPOCALDAS, CORPOGUAJIRA, CORPAMAG, CODECHOCÓ, CORPONOR, CVC, CAS, CARDER, CORTOLIMA, CORPOCHIVOR, CARSUCRE, CORPONARIÑO, CAR, CDA, CORNARE, CRC y CORANTIOQUIA.

Además, se han llevado a cabo reuniones con autoridades ambientales que no forman parte de estos convenios, como la C.R.C., CORPOURABÁ, CAM, C.S.B., C.D.M.B., C.R.A. y C.R.Q. A través de estos convenios y del contacto directo con dichas autoridades, se han celebrado 24 mesas técnicas donde se han tratado temas relacionados con la Certificación Ambiental y la actualización de las capas geográficas en Anna Minería, administradas por estas corporaciones.

V) Retos

Con fecha al mes de noviembre durante la vigencia del 2024, se han realizado importantes avances en la gestión de certificaciones ambientales. En particular, hemos establecido un vínculo eficiente con las corporaciones pertinentes y hemos dedicado esfuerzos significativos para aclarar y gestionar las certificaciones ambientales. Como resultado, las corporaciones han cargado exitosamente 330 certificaciones en la plataforma Vital.

De igual manera es de indicar que se han registrado demoras por parte de algunas corporaciones en la respuesta a las solicitudes de aclaración y en el cargue de los certificados ambientales en la plataforma Vital.

Vi) Resultados consolidados de las acciones de cumplimiento del fallo

La Agencia Nacional de Minería, desde la entrada en vigencia de la orden temporal 1.3.1 ordinal tercero de la decisión de segunda instancia frente al medio de control de Protección de los derechos e intereses colectivos, bajo la radicación 25000234100020130245901 donde dispuso que la Agencia Nacional de Minería debía exigir a los proponentes que aporten certificación ambiental, la cual indicará si el proyecto se superpone o no con alguno de los ecosistemas protegidos e indicó el paso a seguir en caso de no existir certeza para conceder el área en titulación, para el cumplimiento de esta, concedió el término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia.

Que, en virtud de la exigencia del Consejo de Estado, se han radicado **1386** solicitudes de propuesta durante lo corrido de la vigencia 2023 y 2024 y como consecuencia de ello, esta autoridad ha recibido **656** certificados ambientales por parte de los interesados, donde se han evaluado **585** certificados y cuyo resultado es el siguiente:

1. Que el **59%** (384) de los certificados ambientales aportados cuentan con viabilidad ambiental y en razón a ello, es procedente continuar con el trámite minero.
2. Por otro lado, tenemos que el **6%** (39) de las Certificaciones Ambientales evaluadas, establece la incompatibilidad del área para el desarrollo minero y en razón a esto, no es posible continuar con la solicitud minera.
3. Finalmente, en el **25%** (162) de las certificaciones aportadas se evidencia que esta autoridad minera no cuenta con la certeza para establecer la compatibilidad o no de la actividad minera en el área de interés, razón por la cual, la ANM se abstiene a resolver de fondo en virtud de lo ordenado por el Consejo de Estado.

Ahora bien, en cumplimiento a lo ordenado en lo previsto en el numeral 2 del artículo 2 del **Decreto No. 107 del 26 de enero de 2023**, el Gobierno Nacional adoptó medidas para el cumplimiento de la referida sentencia, para lo cual decretó que la Agencia Nacional de Minería debía exigir el certificado a los proponentes de las áreas que a la fecha de expedición del Decreto aún no contaran con título minero. Razón por la cual, esta autoridad minera expidió 11 autos de requerimiento masivo durante el año 2023. Así mismo, durante lo corrido del presente año la Agencia Nacional de Minería ha expedido **veinte y seis (34)** autos de requerimiento para un total de 45 autos de requerimiento masivo, para **Cuatro mil ochocientos dieciocho (4941)** propuestas de contrato de concesión y propuestas de contrato de concesión con requisitos diferenciales, para que allegaran a través de la Plataforma Anna Minería certificación (es) ambiental(es) expedida(s) por autoridad(es) competente(s) o la (s) solicitud (es) con constancia y fecha de radicado(s) de dicha certificación ante la (s) autoridad (es) ambiental (es) competente(s); junto al archivo geográfico en formato shapefile (Comprimido.zip) del área certificada efectuada a través de la plataforma Vital del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, so pena de decretar el DESISTIMIENTO del trámite de la propuesta.

Como consecuencia de los requerimientos masivos efectuados en lo corrido del año y una vez cumplidos los términos de los mencionados requerimientos, esta autoridad minera, verificó la información encontrando entonces que:

1. Que el **57% (2818)** de las propuestas requeridas, aportaron la **Certificación Ambiental** expedida por la autoridad ambiental competente del área de su interés
2. El **20% (1000)** de las propuestas requeridas, aportaron **constancia** de radicación de la solicitud ante vital
3. El **22 % (1097)** de las propuestas requeridas, **no dieron respuesta** al auto de requerimiento o en su defecto, manifestaron su intención de **desistir** del trámite de la propuesta,

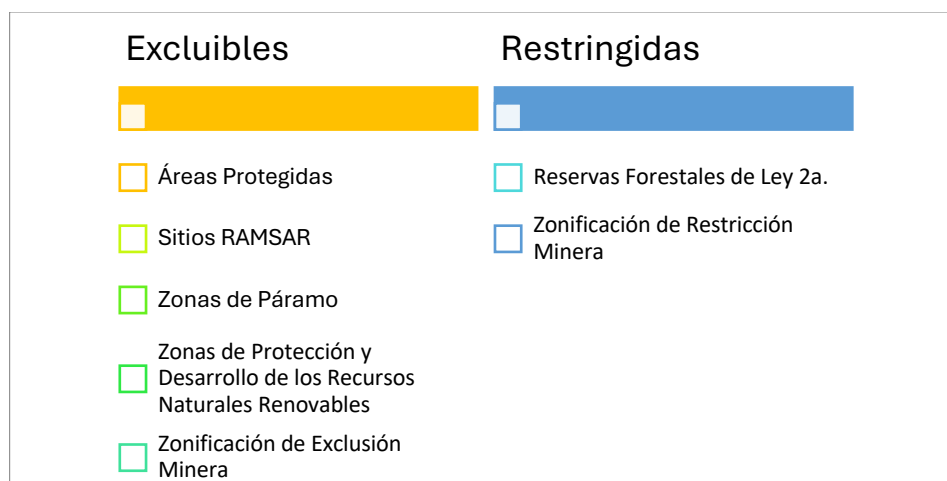
4. Y el **0.5% (26)** propuestas se encuentran cumpliendo los términos para dar respuesta al auto de requerimiento

No obstante, lo anterior, es preciso indicar que a la fecha de este informe tres (3) de los autos de requerimiento efectuados se encontraban en términos para dar respuesta al requerimiento de Certificación Ambiental. Así las cosas, cabe indicar que durante la presente vigencia se tienen **56%** (1578) de las propuestas aportaron su Certificación o Certificaciones Ambientales, las cuales indican la compatibilidad del área para adelantar actividades mineras y, por ende, resulta su viabilidad para continuar el respectivo trámite. Por otro lado, se tiene que el **30%** (832) de las propuestas que aportaron Certificaciones Ambientales, luego de la respectiva evaluación, se establece esta autoridad minera no cuenta con la certeza para establecer la compatibilidad o no de la actividad minera en el área de interés, razón por la cual, la ANM se abstiene a resolver de fondo en virtud de lo ordenado por el Consejo de Estado.

Complementario a lo anterior y específicamente lo relacionado con la Orden 1.3.2, la ANM a través del Grupo de Catastro y Registro Minero mantuvo una comunicación dinámica y constante con las autoridades ambientales para el desarrollo de acciones derivadas de las mesas técnicas donde se intercambió información y se trabajó en la interpretación de los datos geospaciales proporcionados por dichas autoridades para determinar su carácter como áreas excluibles o restringidas para la actividad minera.

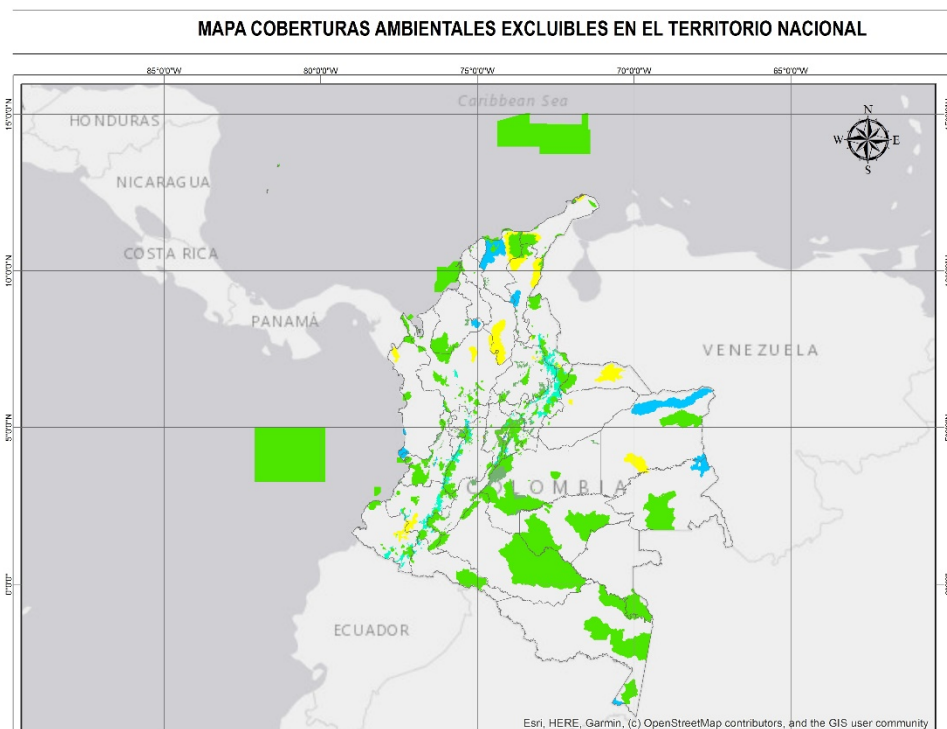
Una vez recibidas las coberturas geográficas, el Grupo de Catastro y Registro Minero realizó análisis técnicos y jurídicos basados en los documentos que sustentan la declaración de estas áreas ambientales. Como resultado, se clasificaron las zonas excluibles de minería y de minería restringida. En los casos donde no fue posible establecer esta clasificación, las áreas se definieron como informativas.

Establecido el carácter de la información se procedió al cargue de los datos geospaciales en la base de datos geográfica corporativa en las capas correspondientes, tal como se ilustra en la siguiente gráfica que especifica las coberturas de tipo excluible y restringido:

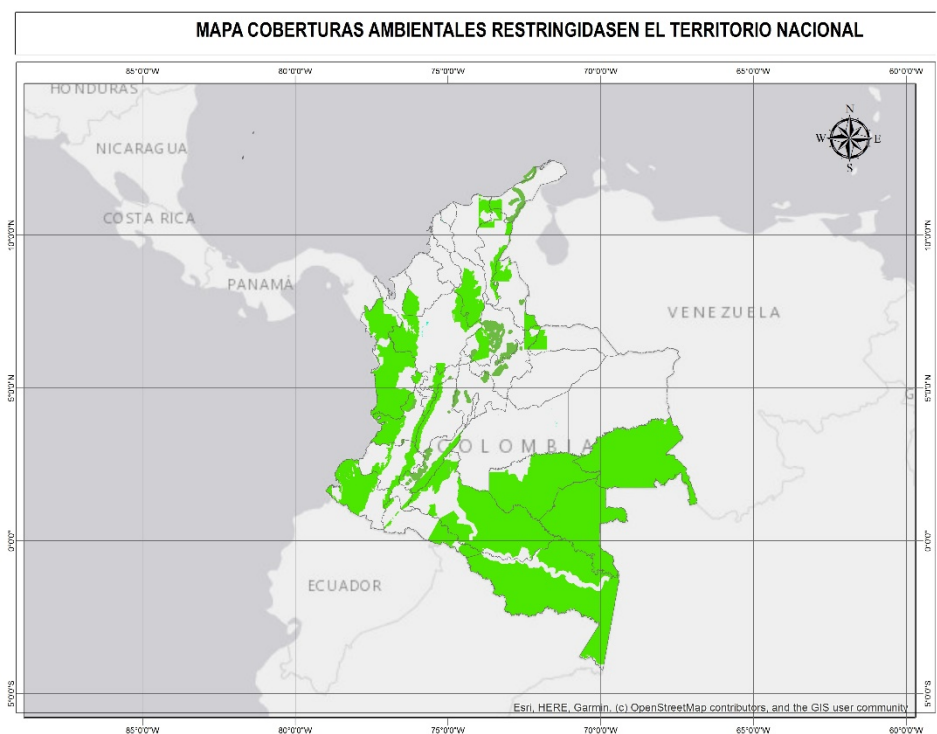


Gráfica 1. Coberturas geográficas actualizadas en la GDB corporativa tipo excluible y restringido

En las gráficas 2 y 3 se muestran los mapas de las áreas ambientales excluibles y restringidas de la minería.



Gráfica 2. Mapa con la información de las coberturas geográficas ambientales excluibles.



Gráfica 3. Mapa con la información de las coberturas geográficas ambientales restringidas.

En cuanto a los datos geospaciales de carácter informativo que fueron remitidos por las autoridades ambientales, se estructuraron para incorporarlos dentro de la base de datos geográfica corporativa y se listan a continuación:

- Ecosistemas Marino Costeros (arrecifes de coral, pastos marinos y manglares).
- Rondas Hídricas
- Zonas de Recarga de Acuíferos
- Bosque Seco Tropical
- Bosque Andino
- Bosque Natural
- Nacimientos de Agua
- Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves
- Cuencas Hidrográficas
- Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS
- Planes de Ordenación Forestal – POF
- Planes de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera – POMIUC
- Estructura Ecológica Principal

La creación de estas capas en el esquema de la base de datos geográfica corporativa, se encuentra en proceso de generación; así como su inclusión en el visor de mapas del Sistema Integral de Gestión Minera -AnnA Minería.

Los resultados derivados de las gestiones descritas en el acápite anterior relacionadas con las órdenes 1.1.4, 1.1.5 y 1.3.2, comprenden con fecha de corte al 30 de noviembre de 2024:

- **125** requerimientos proferidos a las autoridades ambientales solicitando el suministro de información geoespacial relacionada con las áreas de interés ambiental y/o ecosistemas en su jurisdicción.
- **93** mesas técnicas autoridades ambientales, dentro del desarrollo de los convenios interadministrativos vigentes, con el fin de definir los mecanismos para el intercambio de información entre las entidades y el tipo de dato a compartir.
- 1252 polígonos actualizados de los cuales 640 corresponden a áreas excluibles de la actividad minera, 98 a zonas de minería restringida y 514 a coberturas de carácter informativo, las cuales se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1. Áreas por tipo de cobertura excluible y restringida

Tipo de área	Superficie por tipo de área (Ha)	Cobertura	Superficie cobertura (Ha)
Excluible	36.341.500,26	Áreas Protegidas	25.966.659,27
		Sitios RAMSAR	2.096.761,74
		Zonas de Páramo	2.846.809,09
		Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables	2.381.417,37
		Zonificación de Exclusión Minera	2.642.061,10
		Sabana de Bogotá	407.791,69

Restringida	49.015.612,35	Reservas Forestales de Ley 2a	48.120.485,41
		Zonificación de Restricción Minera	895.126,94

La Tabla 1 presenta las áreas excluibles y restringidas para actividades de exploración y explotación mineras, reflejando un enfoque en la protección de recursos naturales para el país; dentro de las cuales se destacan las áreas protegidas con más de 25,9 millones de hectáreas y que hacen parte de las áreas excluibles, además de las zonas de Reservas Forestales de Ley 2ª con más de 48,9 millones de hectáreas de las áreas restringidas.

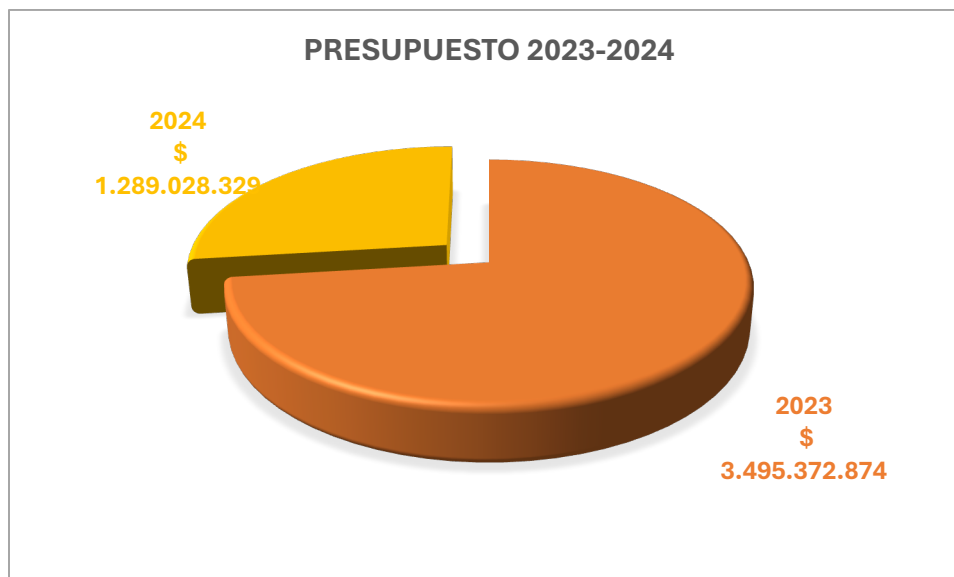
Con relación a los **recursos humanos y financieros** destinados para cumplir con la Sentencia 25000234100020130245901 de agosto de 2022 emitida por el Consejo de Estado, en lo competente al GCRM, durante las vigencias de 2023 y lo corrido de 2024, esta dependencia ha dispuesto tanto personal como presupuesto en el desarrollo de las actividades tendientes a completar lo solicitado en el mandato judicial mencionado.

En este sentido, se han dedicado 70 profesionales con una inversión de \$4.784.401.203 de los cuales 4 corresponden a personal de planta, que de acuerdo a su dedicación al cumplimiento de la Sentencia representan un valor de \$435.273.411 y representan el 9% del total de la inversión. El restante 91% comprende la suma de \$4.349.127.792 correspondiente a la contratación de 62 profesionales, como se ilustra en la Gráfica siguiente.



Gráfica 4 Distribución Presupuestal por tipo vinculación 2023 y 2024

En cuanto al recurso financiero asignado en cada una de las vigencias, se reporta una destinación de \$3.495.372.874 para el año 2023 que representa 73% del total, mientras para lo corrido del año 2024 se han concedido \$1.289.028.329 que comprenden el 27% del presupuesto total destinado, tal como se muestra en la Gráfica 5.

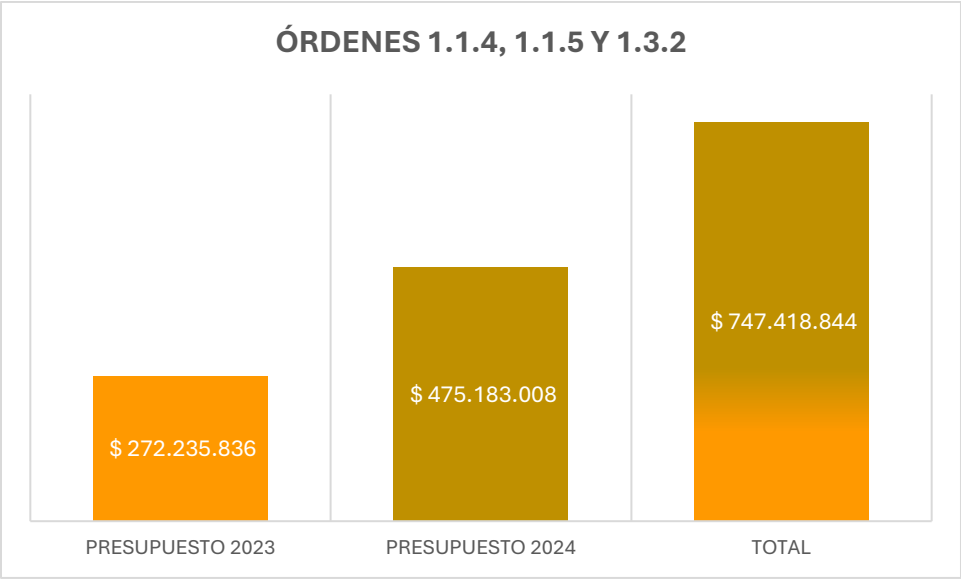


Gráfica 4 Presupuesto asignado por vigencia 2023-2024

Los recursos asignados incluyen la conformación de un equipo de profesionales especializados, quienes vienen trabajando en la implementación de las acciones necesarias para dar cumplimiento a la sentencia. Estas acciones comprenden la actualización y análisis de información, el levantamiento de requerimientos para nuevas funcionalidades de software, la gestión técnica y operativa, así como la interoperabilidad y la atención a los pasivos ambientales. Esto refleja el compromiso del GCRM de garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia, en coordinación con la ANM y el sector, contribuyendo a una adecuada articulación entre la actividad minera y el desarrollo sostenible del país.

El cumplimiento de la orden 1.3.2 que se concatena con las órdenes 1.1.4 y 1.1.5, abordó el análisis de información donde se destinó 17 profesionales durante 2023 y 2024, contemplando la participación del personal de planta con dedicación parcial al cumplimiento de los objetivos de la sentencia.

La inversión realizada para el cumplimiento de estas órdenes refleja para 2023 \$272.235.836 y para 2024 \$475.183.008, para un total de \$747.418.844 (ver Gráfica 6), invertidos en la identificación, delimitación y análisis de la información de áreas ambientales excluibles y restringidas para la minería. Estas acciones aseguran el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la delimitación y actualización de áreas mineras y de los territorios protegidos en los que actualmente existe certeza sobre la exclusión y restricción del desarrollo de actividades mineras protección ambiental en Colombia.



Gráfica 6 Presupuesto para las actividades de actualización y análisis de información